

Iritzia

Behatokia

POR Joaquín Arriola



Presupuestos con gaseosa

Rajoy prevé una reducción de tipos en impuestos directos y especiales (“más dinero en el bolsillo de los ciudadanos”) pero al tiempo más cotizaciones sociales y tasas: ¿sacar el dinero del bolsillo de los ciudadanos?

EL presupuesto general anual del Estado es el instrumento contable que mejor resume la política real de un gobierno. En un alarde de celeridad, el gobierno español ha presentado el 31 de julio el proyecto de presupuestos para el año próximo. Al coincidir la fecha con el inicio de las vacaciones de la mayoría de los trabajadores españoles, no está claro si se quiere enviar el mensaje a la ciudadanía de que los políticos a cargo de la cosa pública están dispuestos a trabajar incluso en agosto o si es una demostración de diligencia y eficacia del gobierno, capaz de presentar un proyecto tan complejo poco después de terminado el *embargo europeo* de las cuentas públicas nacionales: como se sabe, desde hace un tiempo, el primer semestre del año se dedica a que la Comisión Europea ejerza de comisario político de la situación fiscal y de las reformas neoliberales en curso en cada estado miembro, aporte recomendaciones, revise su implementación y, en su caso, conceda el permiso (con el aval de los gobiernos de los Estados-miembro) para que en el segundo semestre los parlamentos y ejecutivos respectivos se pongan manos a la obra en el diseño del nuevo presupuesto anual. España forma parte del grupo de seis países

sometidos a escrutinio por mantener desequilibrios importantes en la gestión de sus cuentas públicas, al igual que Irlanda y Eslovaquia, aunque a juicio de la Comisión estos desequilibrios no sean actualmente “excesivos” como en el caso de Francia, Croacia y Portugal (Grecia y Chipre son caso aparte, sometidos a intervención por medio de programas de ajuste macroeconómico).

Aunque algunos quieran pensar que España recibe un trato de favor por haber hecho de perro guardián de los intereses financieros en la crisis griega –que son los intereses que más interesan a los interesados gestores comunitarios– quizá esta situación que se podría calificar de “mala, pero no tanto”, explique la relativa pasividad de las autoridades comunitarias con el proyecto de presupuesto español. Así, en las recomendaciones del Consejo al gobierno de España del 13 de mayo se especificaba que “España está actualmente sometida al componente corrector del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2015, el Gobierno prevé una mejora del déficit público global, que pasaría a representar el 4,2 % del PIB en 2015 y disminuiría gradualmente hasta el 2,8 % del PIB en 2016”

pero “según las previsiones de la primavera de 2015 de la Comisión, en 2015 y 2016 se registraría un déficit del 4,5 % y el 3,5 % del PIB, respectivamente. Así pues, existe el riesgo de que no se alcancen los objetivos de déficit global para 2015 y 2016”.

Sin embargo, lejos de ponerse nerviosos, los políticos europeos, mayormente conservadores y social-liberales, recomiendan que España tome medidas con el fin de garantizar una corrección duradera del déficit excesivo “en 2016 a más tardar”. Las medidas recomendadas son las habituales: atornillar los presupuestos de las Comunidades Autónomas, reduciendo el gasto sanitario, terminar de privatizar las cajas de ahorro, hacer que los salarios crezcan menos que los beneficios... También se recomienda seguir mareando la perdiz en materia de desempleo juvenil (literalmente: “Tomar medidas para aumentar la calidad y eficacia de la ayuda y del asesoramiento para la búsqueda de empleo, especialmente como parte de la lucha contra el desempleo juvenil”) y para incentivar el empleo en general, reducir las ayudas sociales (“racionalizar los regímenes de renta mínima y de ayuda familiar y fomentar la movilidad regional”). El documento de recomendaciones también tiene tiempo de acordarse de que el tamaño medio de las empresas es muy reducido, pero como están a la espera de que el

gobierno haga un estudio de las causas de este fenómeno, se le recomienda que, mientras tanto, elimine el trato a favor de las pymes, facilite la entrada de las grandes empresas multinacionales de servicios profesionales y recorte las competencias en materia comercial y de regulación productiva de las Comunidades Autónomas (literal: “suprimir los obstáculos al crecimiento de las empresas, tales como las disposiciones que dependen del tamaño de las empresas; adoptar la reforma planeada de los servicios profesionales; acelerar la aplicación de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado”). En cualquier caso, el gobierno no se ha preocupado de modificar sus objetivos de déficit y en el proyecto de presupuesto 2016 insiste, se supone que con el aval comunitario, en que el déficit será de 32.000 millones de euros (2,8% del PIB) y no de 40.000 millones (3,5% del PIB) como estima la Comisión Europea.

En el comunicado oficial de presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2016 se señala que el presupuesto de 2016 “cierra una etapa de cambio de ciclo y abre una nueva de consolidación del crecimiento y del empleo.” Pero esto no es evidente, por cuanto en 2015 el presupuesto total de operaciones no financieras se elevó a 315.500 millones de euros, un 28,7% del PIB –medido de acuerdo con el escenario macroeconómico previsto por el propio gobierno–, y el previsto para 2016 se reduce en 10.000 millones, equivalentes a un punto del PIB previsto, quedando en un 27,5% del PIB de 2016. De qué forma un menor peso de gasto presupuestario pueda reflejar un cambio de ciclo es un misterio que flota entre la fe del carbonero neoliberal y la propaganda del que se prepara para unas próximas elec-

De qué forma un menor gasto presupuestario pueda reflejar un cambio de ciclo es un misterio que flota entre la fe del carbonero neoliberal y la propaganda del que prepara unas elecciones con expectativas poco halagüeñas

ciones con expectativas poco halagüeñas. Que un presupuesto que reduce en 2.011 millones de euros la financiación de fomento de la actividad productiva pueda contribuir al crecimiento más que el de este año, es otro dato que profundiza el misterio. ¿Quién va a financiar la prioridad de los PGE 2016 que consiste, en palabras del gobierno, en “seguir manteniendo el Estado de Bienestar”? Pues, vistas las cifras, parece ser que serán los parados, que van a ver recortados en 5.479 millones de euros las prestaciones a recibir, un 88% del aumento previsto en pensiones (3.790 millones) y otros gastos sociales (2.409 millones). Y el resto del aumento del gasto social lo pagarán los trabajadores ocupados a través de las cotizaciones sociales, que se prevé aumenten en 8.573 millones.

Por lo visto, el gobierno considera que los funcionarios son un colectivo electoral en disputa y piensa dedicar 866 millones de euros a pagar más salarios públicos, mientras que a los parados los da por perdidos –ya se sabe que los pobres, porque lo son, ejercen menos sus derechos ciudadanos, entre ellos el voto– y plantea recortarle 630 euros a cada parado, a sumar a los 300 euros menos de gasto por desempleado de este mismo años respecto a 2014.

El gobierno insiste en que el año próximo los ciudadanos verán recompensado en el presupuesto el “sacrificio realizado en los peores años de la crisis económica”. Al parecer todos nos beneficiaremos por el lado de los ingresos y los funcionarios por el lado de los gastos. Pero la promesa fiscal se queda en eso, ya que se prevé una reducción de tipos en impuestos directos y especiales, de modo que se espera que la recaudación de impuestos apenas se eleve en 357 millones respecto a la prevista en el presupuesto de 2015, (“más dinero en el bolsillo de los ciudadanos”) pero que se compensarán con el aumento de las cotizaciones sociales y con un aumento de las tasas por importe de 3.109 millones de euros (¿sacar el dinero del bolsillo de los ciudadanos?), en un curioso ejercicio de modernización del sistema fiscal, ¡menos impuestos, y más tasas!

Esta es la visión de la recuperación del gobierno: menos gasto en fomento, y una prioridad social que consiste en desvestir un santo para vestir a otro, y al final, dedicar 720 millones, unos quince euros por habitante más que este año, a gastos sociales. Y como siempre, que los asalariados paguen la factura. Nada nuevo bajo el sol de verano.

* Profesor de Economía Aplicada de la UPV/EHU

Albia | Nuestra Señora de Begoña
servicios funerarios

900 24 24 20

Bilbao, Tellería,32 _____ Tel: 94 445 35 58
Durangaldea, Pol. Padureta, UAL 3 _____ Tel: 94 620 40 81
Zornotza, Pol. Biarritz, z/g _____ Tel: 94 630 19 44
Ermua _____ Tel: 94 317 69 84

Zumaia, Santiago Auzoa, 26 _____ Tel: 94 386 15 56
Mutriku, San Agustín, 15 _____ Tel: 94 360 47 78
Eibar, Txalxa Zelai, 4-6 _____ Tel: 94 320 10 95
Donostia, María Dolores Aguirre,96 _____ Tel: 94 332 26 33

A tu lado.
Para tu tranquilidad.

www.albia.es